

INDICE

FEDERALISMO ELECTORAL: COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ORGANOS PUBLICOS LOCALES

- I. INTRODUCCIÓN.**
- II. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN MÉXICO.**
- III. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL ORGANO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN PREVIO A LA REFORMA ELECTORAL DEL AÑO 2014.**
- IV. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS PUBLICOS LOCALES ELECTORALES Y DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DESPUES DE LA REFORMA ELECTORAL DEL AÑO 2014.**
- V. PROPUESTA PARA FORTALECER EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ELECTORAL, EN LOS ESTADOS AL OTORGARLES AUTONOMIA PRESUPUESTAL.**
- VI. BIBLIOGRAFÍA.**

FEDERALISMO ELECTORAL: COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ORGANOS PUBLICOS LOCALES

Autores: Licenciado Bernardo José Cano González y

Maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado

“La democracia necesita una virtud:
la confianza. Sin su construcción,
no puede haber una auténtica democracia.”
Victoria Camps (1941-) Filósofa española.

INTRODUCCIÓN.

Para garantizar la certeza en la renovación de los órganos de representación del Estado Mexicano, el derecho electoral regula la existencia, el funcionamiento y las atribuciones de las autoridades electorales en los ámbitos federal y local, siendo estas el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a sus análogos a nivel local, las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales, órgano que le pertenece a la procuraduría general de la República.

En la presente ponencia comentaremos las áreas de competencia que tiene el Instituto Nacional Electoral y los Órganos Locales Electorales, Instituciones que surgen como consecuencia de la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, la cual rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), con competencia entre otras de gran relevancia, como designar a los consejeros integrantes de los órganos superiores de dirección de los órganos públicos Locales, antes Institutos Electorales, en términos del artículo 41, fracción V, apartado C de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Instituciones electorales de los Estados de la Federación se transformaron en Órganos Públicos Locales, de los cuales entre otros sus atribuciones Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad; Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda; Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales; Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate; Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto; Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; todo esto con el fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral

En este proceso que siempre ha preocupado a nuestros legisladores de ir perfeccionando las atribuciones del órgano responsable de organizar las elecciones en nuestro país siempre de manera auténtica, en un entorno de paz y de forma periódica.

Por último pero no menos importante se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional; el INE regulará la organización y funcionamiento de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los organismos públicos locales que *comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos*

del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

Hoy nuestro sistema electoral nacional esta instrumentado con un marco normativo de avanzada que incluye la participación en forma directa de los ciudadanos en la posibilidad de formar parte de la estructura de mando en los poderes ejecutivos y legislativos; así como en los actos y acciones políticas trascendentales a través de la participación ciudadana, permitiendo esto que la cultura democrática nacional sea parte de los sistemas de democracia moderna en el mundo.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES EN MÉXICO.

La democracia es un proceso de organización social caracterizado por los principios de libertad, igualdad y justicia, en el acceso y elección de los satisfactores que requieren los miembros de un grupo social. La democracia por tanto, como sistema de vida supone la libertad de las personas para elegir los satisfactores, tangibles e intangibles, que resuelvan sus necesidades de todo tipo. (Castellanos Hernández, 1999:17)

El artículo tercero constitucional cita a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Cuando un país decide configurarse con apego a los principios de la democracia representativa, requiere una institución responsable que de manera imparcial organice el ejercicio del derecho del voto, tanto en su forma activa y en su forma pasiva supervise y vigile que los institutos políticos denominados partidos otorguen las facilidades correspondientes a sus integrantes o simpatizantes para poder estos ejercer su derecho al voto pasivo es decir, poder formar parte de los órganos de dirección política de nuestro país., o en el caso de los candidatos independientes propiciar las condiciones para que estos puedan competir en condiciones equitativas con los partidos políticos, así mismo, esta institución debe garantizar que solo voten los ciudadanos que se encuentren en pleno goce de sus derechos político electorales, que la ciudadanía con derecho a ello pueda expresar con toda libertad su voluntad electoral y que los votos cuenten y se cuenten.

La adscripción y composición de las autoridades electorales encargadas de organizar las elecciones ha conocido diversas etapas en la historia de nuestro país, que van desde la descentralización en manos de las autoridades locales hasta la autonomía de una autoridad federal encargada de dicha tarea y hoy órganos locales electorales que realizar las funciones que la ley les confiera en la materia electoral en cada una de las entidades federativas de nuestro país.

En una primera etapa que corre desde el origen del Estado-Nación hasta el año de 1946, la organización de las elecciones federales, estuvo en manos de autoridades locales, es decir

gobiernos municipales y estatales en sus respectivos ámbitos de competencia, sin que hubiese una autoridad electoral central que tuviese a su cargo las funciones de organización y supervisión. Los resultados electorales eran hechos llegar por dichas autoridades locales, a las Cámaras federales que se constituían en Colegio Electoral, para efecto de la calificación y solución de las controversias que hubieran podido surgir con motivo de su elección o de la de Presidente de la República.

Con la ley electoral de 1946 aparece por primera vez una autoridad federal encargada centralmente de organizar las elecciones así como otra encargada de llevar a cabo el registro de los electores; siendo estos la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y el Registro Federal de Electores, estos organismos pertenecían a la administración centralizada de la Secretaría de Gobernación para posteriormente convertirse en órganos descentralizados de la misma secretaría.

Al promulgarse la ley electoral de 1951 la referida comisión se transformó en la Comisión Federal Electoral, misma en la cual se fue generalizando y extendiendo la participación de los partidos políticos.

En 1977 con la nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales permitía la participación de todos los partidos políticos que contaran con registro; en esta misma ley se ordenaba la estructura de un colegio electoral

Es a través de la reforma constitucional de 1990 que se adoptó una nueva fórmula organizativa al ser sustituida la Comisión Federal Electoral por el Consejo General del Instituto Federal Electoral como el órgano de mayor peso, rango y jerarquía con relación a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, expidiendo el Congreso de la Unión el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo aún el Presidente del Consejo General era el Secretario de Gobernación, a partir de este año se fueron dando una serie de reformas al COFIPE en los años 93-94 hasta que en el año 96 se emite un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el cual se reforzó la autonomía e independencia del entonces Instituto Federal Electoral al desligar por completo al Poder Ejecutivo de la integración del Consejo General de este órgano reservándose el derecho al voto únicamente para los consejeros ciudadanos, el nuevo

artículo cuarenta y uno de la Constitución estableció que: “la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley”.

2007: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones con los siguientes objetivos fundamentales:

Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales.

Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación.

Promover la participación ciudadana en las elecciones.

Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.

Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales.

Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados.

Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.

El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.

El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como local.

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la Ley prevea.

De acuerdo con la reforma constitucional, entre las funciones principales del INE se encuentran las siguientes:

Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones.

Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.

Verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

Fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL ORGANO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN PREVIO A LA REFORMA ELECTORAL DEL AÑO 2014.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, es un organismo público autónomo de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. El ejercicio de esta función estatal se rige por los principios contenidos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que son los de: Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad, Certeza y Profesionalización.

A lo largo de casi dos siglos, en el Estado de Yucatán se han promulgado cinco Constituciones locales para llegar a la que actualmente nos rige, siendo éstas, la de 1825, 1841, 1850, 1862 y 1918. Se puede destacar que en la segunda Constitución, promulgada el 16 de mayo de 1841, con sus 80 artículos y 3 transitorios, se estableció por primera vez la figura de la elección popular directa.

El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, aprobó el Decreto número 23 publicado en el Periódico Oficial el 31 de enero de 1918, mediante el cual se expidió la primera Ley Electoral del Estado de Yucatán, que regulaba y garantizaba con amplitud, el derecho a la libre emisión del voto. Esta ley estableció en su Capítulo Segundo, la figura de los candidatos independientes para ocupar los cargos de Diputado al Congreso del Estado y de Concejal de los Ayuntamientos; sin embargo, no permitía a dichos candidatos postularse para el puesto de Gobernador del Estado.

La Ley Electoral en mención, estableció las figuras denominadas Juntas Computadoras de Votos y Juntas Preparatorias. Las primeras tenían la obligación de realizar el Escrutinio y Cómputo de los expedientes de las elecciones Municipales, de Diputados y de Gobernador; las segundas, una vez instalado el Congreso del Estado, fungían como Comisiones para calificar la legalidad de las elecciones. De inmediato, el Congreso se constituía en Colegio Electoral para estudiar y revisar los expedientes relativos a la elección de Gobernador del

Estado y en su caso, declarar y emitir el Decreto respectivo. Durante las siguientes siete décadas los procesos electorales en Yucatán se desarrollaron con estas características.

Yucatán fue la primera entidad federativa en reconocer el derecho de la mujer a votar y ser votada en el año de 1922. Este novísimo derecho fue ejercido inmediatamente, al ser electa la Señora Elvia Carrillo Puerto como Diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923, siendo la primera mexicana en ocupar un cargo de elección popular. Cabe señalar, que fue hasta el año de 1953 durante el período presidencial de Adolfo Ruíz Cortines, que fue modificada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 34, a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose desde luego, su derecho al sufragio.

El 11 de mayo de 1984 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la Ley Electoral del Estado de Yucatán, misma que estableció que los partidos políticos y los ciudadanos son corresponsables de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, integrando un organismo electoral denominado Comisión Electoral del Estado. Esta Comisión, después de organizar y vigilar el proceso electoral, tenía la atribución de aplicar las fórmulas de los resultados de las elecciones de Diputados de minoría y de Regidores de Representación Proporcional, turnando al Colegio Electoral del Honorable Congreso del Estado, la documentación y la paquetería electoral, quien tenía la facultad de calificar las elecciones estatales.

El Código Electoral del Estado de Yucatán publicado el 5 de abril de 1993, creó el Consejo Electoral del Estado con las atribuciones de preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral y de realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador. Este Código Electoral, mantuvo la figura del Colegio Electoral del Honorable Congreso del Estado, quien tenía la función de calificar las elecciones de Gobernador del Estado y de los Ayuntamientos.

El 15 de diciembre de 1994, se expidió el Código Electoral del Estado de Yucatán, el cual abrogó el anterior del mismo nombre. Este Código de 1994 desaparece la figura del Colegio Electoral del Congreso del Estado, dando nacimiento al Instituto Electoral del

Estado de Yucatán (IEEY), un organismo público autónomo, permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán vigente a la fecha, fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 24 de mayo del año 2006, misma que abrogó el Código Electoral del año de 1994, dando origen al nuevo Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC), teniendo como órgano superior de dirección al Consejo General integrado por cinco Consejeros Electorales, un Secretario Ejecutivo y un Representante de cada Partido Político o Coalición registrado.

La ley vigente, retoma la figura de las Candidaturas Independientes en donde expresamente permite, en su artículo 28 la posibilidad de que los ciudadanos participen como candidatos para cargos de elección popular para Gobernador, fórmulas de Diputados de mayoría relativa y planillas de Ayuntamientos. En contra de dicha disposición legislativa, diversos Partidos Políticos, presentaron en el año 2006, Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales recibieron los números de expedientes 28/2006, 29/2006 y 30/2006, las cuales fueron resueltas conjuntamente el día 5 de octubre del año 2006. Con una votación de seis votos a favor y cinco en contra, reconociendo la validez constitucional de las Candidaturas Independientes en la legislación electoral del Estado de Yucatán.

En consecuencia, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo posible que en el Proceso Electoral 2006-2007, se registraran cuatro planillas de candidatos independientes para competir en la elección de Regidores de los municipios de Izamal, Motul, Tinum y Yobaín. En esa elección del 20 de mayo de 2007, resultó ganador el Candidato independiente del Municipio de Yobaín, Yucatán, convirtiéndose así, en el primer Alcalde elegido de esta forma en México en la época moderna.

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de agosto del 2012, quedó abierta de manera expresa la oportunidad para que cualquier ciudadano de la República pueda competir por algún cargo de elección popular mediante la

figura de las candidaturas independientes, según lo establecido en el artículo 35 fracción II de la citada Carta Magna.

El 22 de enero del año 2007, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, la cual faculta al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, como encargado de la aplicación de esta ley en tiempos no electorales. Con estos mecanismos de consulta popular, los ciudadanos yucatecos pueden involucrarse en los asuntos de interés público sobre los actos y decisiones trascendentales de sus autoridades.

La aplicación de la Ley de Participación Ciudadana por parte de este Instituto, ha llevado a la calificación de Iniciativas Populares que han prosperado en el Poder Legislativo del Estado, traducéndose en derecho positivo a partir de propuestas concretas presentadas por ciudadanos de manera organizada. De igual forma, se han desarrollado 3 procedimientos de Plebiscitos; el primero en el Municipio de Acanceh (2011), el segundo en el Municipio de San Felipe (2013), y el tercero en el Municipio de Chapab (2014), los tres con resultados vinculatorios.

En el marco de la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de la misma el 28 de junio de 2014 se publicó el Decreto 198 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, mediante el cual el H. Congreso del Estado de Yucatán expidió la nueva ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que modificó la denominación del Instituto, para dar paso al hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS PUBLICOS LOCALES ELECTORALES Y DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DESPUES DE LA REFORMA ELECTORAL DEL AÑO 2014.

Organismos Públicos Locales

Los Organismos Públicos Locales (OPL u OPLES) son los encargados de la organización de las elecciones en las entidades federativas para la designación de:

- Gobernadores
- Diputados locales
- Presidentes municipales
- Integrantes de ayuntamientos
- Jefes delegacionales
- Jefe de gobierno de la ciudad de México

Entre otros.

Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución federal, Ley general de instituciones y procedimientos electorales, las constituciones y leyes locales en materia electoral. Son profesionales en su desempeño. Rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Los Organismos Públicos Locales cuentan con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

El patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos.

Facultades de los organismos locales.

Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, establezca el Instituto;
- b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;
- c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
- d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda;
- e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
- f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
- g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;
- h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
- i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;
- j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;

- k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;
- l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;
- m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;
- n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;
- ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;
- o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;
- p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
- q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y

Facultades del Instituto Nacional Electoral

a) Para los procesos electorales federales y locales:

- I. La capacitación electoral;
- II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;
- III. El padrón y la lista de electores;
- IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
- V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y
- VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

b) Para los procesos electorales federales:

- I. El registro de los partidos políticos nacionales;
- II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;
- III. La preparación de la jornada electoral;
- IV. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
- V. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;
- VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales;
- VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;
- VIII. La educación cívica en procesos electorales federales.

Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes Atribuciones:

- a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;
- b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales;

- c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de Coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera;
- d) La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución;
- e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de Iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;
- f) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales.
- g) Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento;
- h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;
- i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, Individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y
- j) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Coordinación entre autoridades electorales

La coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada Organismo Público Local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Esta comisión tiene como objetivo principal establecer los procedimientos para la debida selección y designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los OPLES, así como proponer al Consejo General los mecanismos de vinculación, coordinación y seguimiento entre los órganos tanto de dirección como los ejecutivos del INE con los organismos colegiados estatales, a fin de crear y fortalecer una adecuada

relación interinstitucional, que por lo pronto faciliten las tareas del Proceso Electoral a nivel Federal como Local

La temática de mayor relevancia que atenderá la Comisión será:

- Desarrollar, vigilar y conducir el proceso de selección y designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los OPLES en las entidades federativas con elecciones concurrentes

La temática de mayor relevancia que atiende la Comisión será:

- Desarrollar, vigilar y conducir el proceso de selección y designación de los Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los OPLES en las entidades federativas con elecciones concurrentes
- Someter a la consideración del Consejo General los mecanismos de coordinación y de vinculación del Instituto Nacional Electoral con los OPLES, para el debido ejercicio de las atribuciones que les corresponden.
- Proponer las disposiciones generales y lineamientos de observancia para las áreas del Instituto, referentes a la ejecución de programas con OPLES y someterlas a la aprobación del Consejo General.
- Informar al Consejo General sobre la vinculación, coordinación y seguimiento a las disposiciones generales, reglas, lineamientos y criterios que establezca el Instituto de observancia para los OPLES, así como de los informes recibidos de las Juntas Locales Ejecutivas referentes a la supervisión sobre el cumplimiento de actividades con motivo de los procesos electorales locales.
- Coordinar la elaboración de acuerdos de coordinación con los Organismos Públicos Locales para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.
- Someter a consideración del Consejo General, el Calendario y el Plan Integral de Coordinación con los OPLES para las entidades que celebren comicios concurrentes.

- Desarrollar los proyectos de instrumentos normativos conducentes a la organización de los procesos electorales en las entidades federativas.
- Proponer el diseño orgánico y funcional de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
- Establecer los mecanismos de coordinación con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Hay temas que tienen que ser analizados y formalizados mediante la elaboración de un convenio de colaboración institucional entre el INE y cada uno de los OPLES. Entre estos se encuentran los de coordinación y vinculación para la casilla única, la capacitación y la fiscalización a los partidos políticos.

PROPUESTA PARA FORTALECER EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ELECTORAL, EN LOS ESTADOS AL OTORGARLES AUTONOMIA PRESUPUESTAL.

La polarización entre las fuerzas centrípetas y descentralizadoras pasa por la discusión de temas como la “violación a la autonomía de los estados”, el encarecimiento de los procesos electorales, los errores que se resaltan ya sea en la elección local o federal, contrasta con los hechos de alternancia en aquellos estados en donde durante muchísimos años no se había realizado así como con la conformidad de los actores políticos y los ciudadanos con los resultados finales de las elecciones. Se ha logrado avanzar de la protesta callejera a la lucha jurisdiccional civilizada o incluso en el respeto al trabajo de los órganos administrativos electorales locales y el federal.

Al ser una república federal es importante el garantizar el rol de las entidades federativas y su autonomía en cuanto a su régimen interior, pero encauzado dentro de un gran sistema electoral nacional cuyas facultades estén plenamente definidas y se implemente una coordinación y colaboración que permita tanto la eficacia en sus acciones como una responsable actitud en términos de reducción del costo en la organización de las elecciones.

Un punto central se vio en las elecciones de 2015 en donde a más del 80 % de los OPLES fue recortado el presupuesto que habían enviado sus órganos superiores de dirección ante el poder ejecutivo y para el análisis del legislativo de cada uno de los estados.

Por eso es definitivo para la autonomía de los órganos el dotarles de una garantía de presupuesto traducida en un porcentaje entre 0.5% y el 1% respecto del porcentaje del presupuesto total de la administración pública local que desde luego responderá a criterios como los siguientes:

El número de ciudadanos inscritos en el Padrón electoral de cada entidad federativa.

El número de distritos electorales uninominales de cada entidad federativa.

El número de elecciones que se van a organizar, es decir intermedia, solo ayuntamientos y diputados locales u ordinaria es decir hasta gobernador.

Un tema consustancial a la autonomía presupuestal y a la disminución de costos en los procesos electorales está en función del número de empleados tan dispar entre los OPLES, así como la diferencia en costos de materiales y documentación electoral que pudieran reducirse mediante compras consolidadas a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales.

En relación al tamaño de la estructura de los OPLES, se sugiere que se establezca y regule una tipología de plantilla de OPLES atendiendo a los criterios anteriormente señalados y reduciendo las estructuras que tienen que ver con asuntos que ya no son competencia de los órganos locales. De esta forma establecer entre 5 o 6 tipos de OPLES que atiendan a la diversa conformación geográfica, poblacional y de distritos electorales y número de municipios.

Se está avanzando en la conformación del servicio profesional electoral nacional, más sin embargo se abre la oportunidad de avanzar en una estandarización en número y actividades del personal administrativo así como homologar a los mandos medios y superiores en número y en función, respetando las características propias de cada región así como otros asuntos como la presencia indígena y procurando fortalecer la promoción de la participación ciudadana consciente y responsable.

En ese mismo tenor se plantea ir socializando el uso de las urnas electrónicas a efecto de que a mediano plazo se puedan posicionar y ser aceptados tanto por los actores políticos como por las organizaciones ciudadanas y los votantes en general.

En síntesis se proponen contar con la participación tanto del ámbito federal como local, pero delimitando y precisando sus funciones y generando espacios de coordinación y colaboración y con una planeación estratégica para buscar incidir con mayor eficacia en la participación de una ciudadanía más informada y demandante y eliminando aquellas cuestiones que pudieran afectar la libertad del sufragio como la compra y coacción del voto.

BIBLIOGRAFÍA.

Castellanos Hernández, Eduardo. 1999, reimpresión 2008. Derecho Electoral en México. México: Trillas.

Patiño Camarena, Javier. 2006. Nuevo Derecho Electoral Mexicano 2006. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

LEGISLACIÓN.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

FUENTES EN INTERNET.

<http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/>

<http://www.iepac.mx/>

DATOS DE LOS COAUTORES.

Hidalgo Armando Victoria Maldonado

Maestro en Administración Pública.

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

hidalgovictoria@hotmail.com

Bernardo José Cano González

Licenciado en Derecho.

Titular de la Unidad Jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

bernardo.cano@iepac.mx

bernardo.cano@gmail.com